



## 4. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA ESTEVEZ

### Regulación de los contratos de participación público privada

El proyecto venido en revisión, sobre los contratos de participación público privada, se basa en la creencia de la alianza gobernante, y de aquellos que la apoyan, de que esta herramienta será eficaz en el objetivo de atraer inversión en infraestructura, como también generar desarrollo económico y empleo. Pero, ¿a qué costo?

Ante todo, nos encontramos ante un proyecto que busca flexibilizar y exacerbar algunos aspectos que surgen del decreto de 2005, dictado por el entonces presidente Néstor Kirchner, sobre el Régimen Nacional de Asociación Público-Privada. Buscando allanar el terreno para atraer inversiones, no hace más que habilitar a los grandes capitales privados nacionales -pero particularmente extranjeros- a apropiarse de todas aquellas obras y servicios públicos que puedan tener rentabilidad, con múltiples ventajas, pero aislándolos de cualquier posibilidad de riesgo, ya que es el Estado nacional y sus ciudadanos quienes lo asumen.

Es también una iniciativa extremadamente ambigua en cuanto al término de contratación, ya que como está redactada no faltarán quienes encuentren la manera de utilizar esta norma en un instrumento de privatización de los servicios públicos, ya que el proyecto explicita que la titularidad o régimen de explotación de lo construido en el marco del contrato no necesariamente es del contratante, es decir, el Estado.

En cuanto a la generación de empleo, noto en el texto de la norma que existe una pobre mención de la pequeña y mediana empresa, que en el mercado nacional es el sector más dinámico y que más puestos de trabajo crea. Solo se la menciona en el inciso i), del artículo 4º, y es muy poco referenciada en el resto del texto.

Volviendo sobre la “distribución equitativa de riesgos”, caemos entonces en una falacia, ya que el texto plantea claramente que en materia ambiental –ante un hecho fortuito o de fuerza mayor- el Estado deberá hacerse cargo de estos riesgos, dejándolo desprotegido ante los habituales shocks económicos que sufre la economía argentina, generalmente luego de periodos de gobiernos liberales como el actual.

Por último, el mayor costo a pagar por la Argentina, es la cesión voluntaria de su soberanía, debilitando la posición del Estado nacional, optando entre otras posibilidades como la de dirimir mediante arbitrajes internacionales cualquier conflicto de intereses que se presente para la parte oferente. Así lo expresa la norma en uno de su artículo 9º, inciso x).

Para finalizar mi exposición, me gustaría señalar que la medida en consideración no cuenta actualmente con el apoyo de los sectores nacionales de la construcción, tanto empresas como trabajadores, quienes han sufrido en carne viva las consecuencias del inmenso cambio en la distribución de recursos que Cambiemos viene instrumentando en nuestro país.

Esta oposición no es casual, ya que el denominado proyecto no elimina el actual régimen de obra pública, pero puede reemplazarlo por medio de subcontrataciones y transfiriendo el contrato a otra empresa una vez que se haya cumplido el 20 por ciento



#### Dirección de Información Parlamentaria

del plazo original. No será necesario publicar la licitación en el Boletín Oficial, con lo cual lo que se publicita como un mecanismo transparente facilita la concentración de la obra pública de manera discrecional.

Por lo expuesto, y considerando que existen suficientes herramientas para garantizar la inversión de los privados protegiendo los intereses del Estado nacional, no acompañaré el proyecto en tratamiento tal como está redactado.

## **6. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIUPTADA GALLARDO**

### **Regulación de los contratos de participación público privada**

Como miembro de esta Honorable Cámara, me resulta totalmente sorprendente la forma en que este proyecto de ley sobre contratos de participación público privada que contempla un nuevo mecanismo de contratación sobre concesión de obras públicas o en el régimen general para contrataciones de bienes, servicios y obras públicas ha llegado al recinto, teniendo en cuenta la importancia que tiene para nuestro país este proyecto, que implica una sustancial modificación del sistema de obra pública. Digo esto dada la improvisación ejercida en el recinto por el propio oficialismo.

Este proyecto, que introduce ventajas para las empresas multinacionales y que deja sin efecto la ley de compra argentino desprotegiendo el empleo nacional y a las empresas locales, con más el endeudamiento para nuestro país en una suma aproximada de 40.000 millones de dólares, se presentó en este recinto para su aprobación sin haberse dado el debate correspondiente y con un sinnúmero de falencias.

En estos momentos sensibles y de gran preocupación en nuestro país, dado el aumento del desempleo que se ha generado como consecuencia de las políticas implementadas por este nuevo gobierno, me parece gravísimo que se desproteja a las empresas nacionales y el trabajo que ellas generan. Por el contrario, se deberían generar incentivos para que más empresas nacionales puedan participar de la obra pública, lo que dista enormemente del objeto de este proyecto. Como dije, ocurre todo lo contrario, ya que esta propuesta es claramente un ataque a las pequeñas y medianas industrias, porque permite que las multinacionales del exterior vengan a competir ventajosamente con ellas.

Lo que lo hace más preocupante es que también se establezca que el Estado argentino debe ser la garantía de esas empresas extranjeras, es decir, dar garantías a terceros y volver a ceder jurisdicción, hecho que nos ha costado años de litigios en el extranjero, con consecuentes embargos que impedían el normal desenvolvimiento de nuestra soberanía.

Debo mencionar y traer al debate el gran problema que se le planteó a nuestro país por tener litigios en el extranjero, lo cual nos valió la constante influencia de sectores de poder sobre los jueces intervinientes en contra de los intereses de la Argentina.

Considero que el Estado es el que debe indicar los objetivos a perseguir como país y no dejarlos en manos de los intereses del sector privado que tan solo procurará la forma de obtener mayor rentabilidad, desatendiendo lo que pudiera ser provechoso o no para la



#### Dirección de Información Parlamentaria

Nación. Sin dudas este proyecto le deja al Estado un rol secundario y a disposición del sector privado, en el que los intereses del mismo se sobreprotegen en forma escandalosa ya el Estado termina allanándose a las pretensiones empresariales extranjeras sin límites ni control.

Lo que es, además, sumamente preocupante es que deja abierta la posibilidad que las empresas extranjeras puedan llevarse las divisas en dólares de las reservas de nuestro país sin ningún tipo de limitación. En el contexto en el que se encuentra nuestro país, esa ventaja a las empresas extranjeras parece una decisión muy desacertada.

Quiero dejar asentada mi postura favorable a la ejecución de la obra pública que, sin dudas, representa un beneficio para la clase trabajadora que se emplea a tal fin, ya que genera la reactivación de la economía y una mejora en infraestructura para beneficio de la población.

En ese sentido, se ha dado como gran anuncio de campaña del oficialismo la implementación del mencionado Plan Belgrano, pero hasta el momento no tenemos ninguna novedad para el norte del país y en especial para mi provincia, Tucumán, que se encuentra esperando hace ya casi un año la llegada de las obras.

Al respecto, debo recordar que en oportunidad de la presentación en esta Honorable Cámara del informe del jefe de Gabinete, he consultado al respecto y no hemos tenido ningún tipo de respuesta satisfactoria, encontrándose en un estado de parálisis total. En definitiva, no podemos votar este proyecto en estas condiciones. Debemos estar a la altura de las circunstancias para dar un verdadero debate que permita priorizar la industria nacional, la conservación del empleo y al gran motor de nuestra economía que son las pymes. En función de esto y debido a la necesidad de incorporar modificaciones al proyecto, considero necesario su vuelta a comisión para que se le dé un tratamiento con la seriedad y la celeridad necesaria.

Por ello, comparto la opinión de muchos de mis pares en el sentido de rechazar su aprobación en este recinto y que vuelva a comisión, a fin de que se contemplen las modificaciones de los muchos puntos planteados por las numerosas dudas que genera, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un momento en el que como país debemos reforzar nuestras industrias y la generación de más puestos de trabajo para nuestra gente.

## **7. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO HELLER**

### **Regulación de los contratos de participación público privada**

En los fundamentos del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo se menciona la definición del Banco Mundial sobre el concepto de asociación público-privada: “un contrato a largo plazo entre una entidad privada y un gobierno, para proporcionar un bien o servicio público, en el que la parte privada asume un riesgo significativo y una responsabilidad de gestión, y al mismo tiempo la remuneración está vinculada al desempeño”.

Sin embargo, y sin participar necesariamente de los conceptos de una organización



#### Dirección de Información Parlamentaria

como el Banco Mundial, cuando analizamos el articulado de este Proyecto nos encontramos con medidas que entran en clara contradicción con esta definición. En términos generales, es un proyecto de ley que pone al Estado al servicio del sector privado. Genera incluso una gran preocupación el hecho que por medio de este articulado se abra la puerta a la privatización de bienes estatales y actividades públicas, además de la lesiva cláusula de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales foráneos. En efecto, el inciso b) del artículo 9º señala que los contratos de participación público-privada deberán contemplar “el equitativo y eficiente reparto de aportes y riesgos entre las partes del contrato (...) de modo tal de minimizar el costo del Proyecto y facilitar las condiciones de su financiamiento...” Dado que el responsable y el único que tiene solvencia absoluta es el Estado Nacional, le estaríamos cargando a éste todos los riesgos de estos contratos.

Además, lo que aparentemente se publicita como un mecanismo transparente, no establece como obligación la publicación de la licitación en el Boletín Oficial, lo que podría facilitar la concentración de las obras adjudicadas a algunos empresarios en particular sin conocimiento de la ciudadanía. Esto sí se establece en la ley 13.064, de obras públicas, del año 1947, modificada en el año 2010, aún vigente, .

Consideramos que estamos una vez más ante un Proyecto que escudándose en ideas que nos proveerán de las herramientas para lograr, según sus fundamentos, “el desarrollo de una actividad económica sustentable (...) y el despegue de las acciones de fomento al empleo pleno”, tiene como objetivo profundizar aún más las políticas de desregulación llevadas a cabo por el gobierno nacional desde su asunción y que, a los hechos nos remitimos, no apuntan de ningún modo a beneficiar a las mayorías, todo lo contrario. Este nuevo “Régimen de contratación público-privada” pretende, en realidad, allanar el camino a los inversores privados, utilizando la jerga del Presidente: se les prepara la cancha para que “jueguen” tranquilos.

Siguiendo con aquellos aspectos que más me interesa destacar, el artículo 9º, inciso x), que trata sobre la solución de controversias suscitadas a partir de los contratos de asociación público-privada, queda habilitada la “prórroga de jurisdicción”. Está implícito que se trata de prórroga de jurisdicción en favor de tribunales judiciales o arbitrales extranjeros o comisiones especiales como el CIADI (dependencia del Banco Mundial) en cuyo caso debe tenerse en cuenta necesariamente que dicha eventual prórroga afecta un atributo indelegable del gobierno argentino, que son las atribuciones jurisdiccionales del Poder Judicial de la República.

Para citar sólo uno de los antecedentes en contra de la prórroga de jurisdicción, cabe recordar que el ex presidente doctor Raúl Alfonsín junto con su ministro de relaciones exteriores doctor Caputo, al firmar en el año 1984 el instrumento de ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), efectuó la siguiente reserva al artículo 21 del Pacto: “El gobierno argentino establece que no quedarán sujetas a revisión de un tribunal internacional cuestiones inherentes a la política económica del gobierno, tampoco considerará revisable lo que los tribunales nacionales determinen como causas de ‘utilidad pública’ e ‘interés nacional’, y ni lo que estos entiendan por ‘indemnización justa’.

Dicha reserva no debería ser olvidada por los diputados de la Unión Cívica Radical, que junto con los demás legisladores del bloque Cambiemos impulsan este proyecto de ley. Cuadra recordar a Arturo Sampay cuando señaló que la prórroga de jurisdicción a favor



#### Dirección de Información Parlamentaria

de tribunales del exterior: “ante ‘sus jueces’ ...se trata de una fibra más de las que componen la conyunta (contrato por el cual el propietario de una bestia de labor la entrega a otro, para que, formando yunta con la que a su vez tiene, pueda realizar los trabajos del campo) con que atan a sus yugos (los países dominantes) a los países dependientes décadas atrás”.

Como si esto fuera poco, en el Artículo 26° del Proyecto de PPP, se establece que “Contra los laudos de tribunales arbitrales con sede en la República Argentina sólo podrán interponerse los recursos de aclaratoria y de nulidad previstos en el artículo 760 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación...” sin embargo, el Proyecto no hace referencia a qué procedimiento corresponde en el caso de los laudos de tribunales arbitrales con sede en el exterior, dejando un vacío jurídico preocupante.

Por otro lado, el mismo artículo 9°, inciso g), cuando se refiere a “los aportes que la contratante (el Sector Público Nacional) se compromete a efectuar durante la vigencia del contrato”, que podrán consistir, entre otros, en aportes de dinero, cesión de fondos obtenidos de operaciones de crédito público, de la titularidad de bienes (el otorgamiento de avales, beneficios tributarios, subsidios, franquicias, y/o la concesión de derechos de uso y/o explotación de bienes del dominio público y/o privado, y cualquier otro tipo de concesión...” Deja claramente un espacio a la posibilidad de privatización de los bienes de dominio público. En este punto, y extensivo a todo el articulado de la ley, debería hacerse especial hincapié en la imposibilidad de ceder, por parte del Estado contratante, el derecho de propiedad de los bienes públicos.

En el artículo 8° se establece que el Poder Ejecutivo nacional podrá crear sociedades anónimas en las cuales el Estado tenga participación. “En estos casos la participación estatal deberá alentar y ser compatible con la participación del sector privado en dichas sociedades. ¿Qué significa “ser compatible con la participación del sector privado”? ¿Qué tenga que generar beneficios, o que no pueda ejercer su rol de contralor de la prestación de servicios públicos?

A lo anterior, se suma lo establecido en el inciso j) del artículo 4°, lo cual facilitaría los procesos de extranjerización de los bienes del Estado argentino al instar al contratante a “facilitar el desarrollo del mercado de capitales local y el acceso al mercado de capitales internacional”.

El artículo 9°, inciso d), delega a quienes estipulen los contratos de participación público privada fijar “los mecanismos de control de cumplimiento contractual, sus procedimientos de aplicación y formas de ejecución y el destino de las sanciones de índole pecuniaria”. Una derogación implícita de las leyes y organismos de control como son la Auditoría General de la Nación, y la Sindicatura General de la Nación, conforme a las normas constitucionales imperativas y no renunciables, que pueden quedar a merced de las empresas privadas cuando, como acontece en estos contratos, se trata de emprendimientos en los que interviene el sector público. Asimismo, las sanciones deben ser fijadas por el Poder Legislativo y las controversias suscitadas a su respecto por el Poder Judicial o en todo caso por el Poder Ejecutivo con control del Poder Judicial. Siguiendo con esta línea y nuevamente criticando las palabras del Presidente al concebir a la figura del Estado como un “facilitador” y no una “carga o un obstáculo”, nos oponemos a la redacción del artículo 4°, inciso d), en el cual se establece que la contratante deberá permitir “la recuperación de las inversiones efectivamente realizadas, el repago del financiamiento aplicado al proyecto y una utilidad razonable...”





#### Dirección de Información Parlamentaria

¿A qué se considera “utilidad razonable”? El texto del Proyecto debería ser más explícito en este caso, ya que esta utilidad razonable podría ir en detrimento del poder adquisitivo de los usuarios.

Según el doctor Aristides Corti, “Garantizar una utilidad razonable importa reestablecer la garantía de utilidad que la ley Mitre les reconociese a las empresas ferroviarias británicas que importaron, de acuerdo con la experiencia argentina, el aguamiente de las inversiones efectuadas por dichas empresas, y que constituyera una conducta legitimada por la ley Mitre que fuera fulminada por contraria al interés nacional por Hipólito Yrigoyen, Lisandro de la Torre y Raúl Scalabrini Ortiz”.

Como si esto fuera poco, en el inciso subsiguiente se expresa que la contratante deberá “ponderar la rentabilidad económica y/o social de los proyectos”. Así redactado daría lugar a considerar sólo la rentabilidad económica en las asociaciones, lo que sería especialmente perjudicial en el caso de la provisión de servicios públicos. Finalmente, en el Artículo 1° se le da un marco más general a esta línea ya que en el mismo se lee: “El diseño de los contratos tendrá la flexibilidad necesaria para adaptar su estructura a las exigencias particulares de cada proyecto y a las de su financiamiento, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales existentes en la materia” ¿Cuáles son esas prácticas?

#### Tratamiento de pymes en los contratos de PPP:

Se efectuaron algunas tímidas modificaciones en relación a las pymes en el Senado, que apuntan sin más a “fomentar la participación de pymes”, pero sin ningún tipo de obligación para el contratista, lo que deja a la “buena voluntad” de los capitales inversores la posibilidad de darles prioridad a las pymes, a saber: artículo 4°, inciso i) “La contratante deberá “fomentar la participación directa o indirecta de pequeñas y medianas empresas, del desarrollo de la capacidad empresarial del sector privado y de la provisión de nuevas y más eficientes tecnologías y servicios”.

Es decir, lo incorpora y lo establece al mismo nivel que el fomento a la “actividad empresarial” en general.

Luego, el texto las vuelve a mencionar en el inciso sobre subcontrataciones, de la siguiente manera: Artículo 9°, Inciso u): “... En caso de subcontratación, el Contratista optará, preferentemente, por empresas nacionales y/o por pequeñas y medianas empresas locales”. No ayuda en absoluto a las pymes.

Artículo 12°: “...Los procedimientos de contratación deberán promover, de acuerdo a las características del proyecto, la participación directa o indirecta de las Pequeñas y Medianas Empresas”.

Artículo 13°: “Previo a efectuar el llamado a licitación o concurso público (...) deberá contarse con un informe fundado elaborado por la autoridad convocante respecto de los siguientes aspectos: f) El impacto que provocará el proyecto en la generación de empleo, y en el fomento de las Pequeñas y Medianas Empresas”.

En definitiva, el proyecto carece de incentivos reales y normativa efectiva para que los contratistas se vean obligados a contratar directa o indirectamente al sector de las pymes. Resulta contradictorio el hecho de que en los fundamentos se destaque que los contratos de participación público privada “son una herramienta eficaz” para “la creación de empleo en la Argentina” y el articulado del proyecto se refiera tan



#### Dirección de Información Parlamentaria

débilmente a la participación del sector pymes, que es justamente el mayor creador de empleo en el país.

Expreso mi rotundo rechazo a estas disposiciones plasmadas en el Proyecto del oficialismo ya que una vez más, atentan contra la soberanía de nuestro país y el rol del Estado como garante del bienestar de toda la sociedad, dejándoles la posibilidad a los capitales privados tanto nacionales como internacionales de aplicar sus criterios de rentabilidad empresarial en los bienes de dominio público.

Como siempre suelo decir, considero que el sector privado es importante para reactivar la economía, pero su actividad debe necesariamente estar acompañada por un activo rol regulador del Estado y, definitivamente, este Proyecto expresa lo contrario.

Por último, y más específicamente sobre el tema de la prórroga de jurisdicción, comprometo en este acto a todos los diputados a no claudicar en la defensa de la soberanía, la dignidad y el honor de la República y de la Constitución Nacional, rechazando tergiversaciones o interpretaciones que el carácter imperativo de sus normas no toleran ni permiten.

## 11. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO TOMAS

### **Regulación de los contratos de participación público privada**

La figura de los contratos administrativos ha sido largamente debatida en el ámbito nacional e internacional. La discusión giraba en torno al régimen aplicable a esos contratos administrativos. Se debatía acerca de sus contenidos e implicancias y si revestían, pues, diferencias con los contratos entre particulares, los cuales se basan en dos principios: la autonomía de la voluntad y la igualdad entre las partes.

A su vez, las discusiones tenían una razón concreta: se hablaba, a fin de cuentas, de la presencia y participación del Estado una persona pública con fondos públicos en una relación contractual. Y, como sabemos todos, el Estado debe realizar y proteger el interés público.

Por todo eso, era y es importante dotar a las contrataciones de las que participa el Estado de un marco normativo transparente y legítimo. El Estado solo debe actuar para cumplir fines públicos y, cuando lo haga, debe respetar todo el ordenamiento jurídico en todas las etapas contractuales: desde la previsión presupuestaria para contratar hasta los controles de su ejecución.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las contrataciones públicas suponen diferencias cualitativas y cuantitativas con los contratos más comunes entre particulares: no es lo mismo vender un inmueble o un auto que contratar la realización de una obra pública por miles de millones de pesos.

Estas consideraciones hicieron que los contratos administrativos o estatales fueran diferentes de los contratos entre particulares. Algunos llamaron a esas diferencias “prerrogativas”, pero, a fin de cuentas, solo suponen notas especiales que hacen a la protección del interés público: por ejemplo, el establecimiento de procedimientos de contratación que garanticen transparencia como, por ejemplo, las licitaciones públicas.



## Dirección de Información Parlamentaria

La misión, en todos los contratos administrativos, públicos o estatales, es concreta. Cito al artículo 1° del decreto 1.023/01, que el artículo 30 del dictamen de mayoría declara inaplicable: “obras, bienes y servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible, coadyuvando al desempeño eficiente de la Administración y al logro de los resultados requeridos por la sociedad”

Pese a que ese objetivo es claro, todo ello supone muchas reglas, que hacen a las contrataciones públicas más complejas que las privadas. Complejidad que, lamentablemente, no puede ser dejada de lado sin resignar legitimidad, eficacia y transparencia. Es posible entonces que los contratos públicos sean más complejos y estructurados que los privados, pero esa menor flexibilidad es necesaria.

Con la iniciativa del Poder Ejecutivo de participación público-privada en contrataciones del Estado se dejan de lado pautas de protección del interés público que consagran flexibilidades y beneficios para los contratistas privados, no para usuarios o ciudadanos. Nuevamente corresponde aclarar: los regímenes de contratos públicos (la Ley de Obras Públicas -13.064-, de concesión de servicios públicos -17.520-, o el decreto 1.023/01) se sancionaron para asegurar un marco legitimidad, eficacia y transparencia, no por un simple capricho. Ahora, bajo la promesa –ya inverosímil- de inversiones privadas, empujan al Estado a dejar de lado regímenes especiales para contratar de acuerdo a parámetros que no se aclaran, salvo para brindar ventajas al sector privado.

¿Es esto contradictorio con los contratos públicos? Por supuesto. Los regímenes de contratos públicos se sancionan para dotar a esos convenios de razonabilidad, eficiencia, libre concurrencia, transparencia, publicidad, responsabilidad pública e igualdad de tratamiento para oferentes, principios previstos en el artículo 3° del decreto 1.023/01).

El dictamen de mayoría, sobre participación público privada, entre tantas deficiencias, no precisa el objeto de las contrataciones; no se sabe si se aplicará para comprar resmas de papel o hacer puentes (artículo 1°); no especifica los procedimientos de contratación (artículo 12); ni siquiera exige previsión presupuestaria (artículos 6°, 13 y 16), a diferencia, por ejemplo, de la Ley de Obras Públicas, que en su artículo 7° establece:

“No podrá llamarse a licitación ni adjudicarse obra alguna, ni efectuarse inversiones que no tengan crédito legal. Exceptúanse de este requisito las construcciones nuevas o reparaciones que fueron declaradas de reconocida urgencia, con cargo de solicitar el otorgamiento del crédito correspondiente al Honorable Congreso. En caso de que el mismo no se hubiera pronunciado dentro del período ordinario correspondiente, se tendrá por acordado el crédito solicitado, así como la autorización para financiarlo”.

Por otra parte, no detalla las pautas de ejecución de los contratos (pero provee garantías a los contratistas, eliminando el riesgo empresario, artículo 4°, inciso d); permite la cesión o subcontratación (artículo 9°, incisos t) y u); declara inaplicables las normas sobre responsabilidad pública (artículo 9°, inciso p); prevé solo control de la AGN (artículo 22) sin estipular control también de la SIGEN; tiene un capítulo sobre “anticorrupción” pero no se incluye norma alguna sobre acceso a la información pública (artículo 24); mientras que el artículo 19 del decreto 1.023/01 prescribe: “Control del procedimiento contractual. Toda persona que acredite fehacientemente algún interés, podrá en cualquier momento tomar vista de las actuaciones referidas a la contratación, con excepción de la información que se encuentre amparada bajo normas de confidencialidad, desde la iniciación de las actuaciones hasta la extinción del contrato,





#### Dirección de Información Parlamentaria

exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas. La negativa infundada a dar vista de las actuaciones se considerará falta grave por parte del funcionario o agente al que corresponda otorgarla. La vista del expediente no interrumpirá los plazos”. Por último, admite las prórrogas de jurisdicción para las soluciones de controversias.

En resumen, se trata de un régimen especialmente construido para garantizar los intereses de las empresas que contraten con el Estado, sin resguardo alguno para el interés público. Es decir, es un régimen de contrataciones estatales para el beneficio privado. Usuarios, consumidores, administrados y ciudadanos quedan, pues, descartados en esta iniciativa. Se descarta, entonces, la legitimidad de las contrataciones y de las actuaciones estatales para crear marcos contractuales a medida de las ganancias de los grandes contratistas privados.

El interés público debe realizarse y asegurarse dentro de marcos claros y previsibles. La transparencia y la eficacia del Estado no es algo que nosotros ni los ciudadanos estamos dispuestos a conceder en aras de oscuridades basadas en las míticas figuras de las inversiones extranjeras.

La transparencia y la eficacia estatal se logran aplicando las normas existentes. El crecimiento del país depende de la legitimidad de todas las actuaciones de los órganos estatales, no de las promesas de empresarios.

Trabajemos para que el Estado funcione bien con recursos genuinos y propios, antes que endeudarnos y comprometernos bajo reglas oscuras y desventajosas.